



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-019-2017-00486-02 (O2-21-271)
Demandante: EDWAR PESTAÑA PEREA
Demandado: EULISES PALACIO Y OTROS
Procedencia: JUZGADO DIECINUEVE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No 111 DEL 28 DE JULIO DE 2023
Asunto: CONTRATO DE TRABAJO- PRESTACIONES

En Medellín, a los veintiocho (28) días del mes de julio de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por **EDWAR PESTAÑA PEREA** en contra de **EULISES PALACIO, SM CONSTRUCTORES S.A.S., INMATEC Y CIA LTDA, SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A., EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S., y NACIONAL DE SEGUROS S.A.**, radicado bajo el n.º 05001-31-05-019-2017-00486-02 (O2-21-271).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante poderhabiente judicial el señor EDWAR PESTAÑA PEREA persigue se condene en forma conjunta, solidaria o separadamente al señor EULISES PALACIO, SM CONSTRUCTORES S.A.S., INMATEC Y CIA LTDA, SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A., y la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S., al reconocimiento de los días laborados del 01 de marzo al 17 de marzo de 2016, las cesantías del 15 de febrero hasta el 17 de marzo de 2016, los intereses a las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, la indemnización por despido sin justa causa, los aportes al sistema de seguridad social, la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, la indexación de lo que no sea excluyente con la indemnización moratoria, y las costas procesales (Fols. 3 a 12 archivo No 01).

Como fundamento de las pretensiones enarboladas manifestó que desde el 15 de febrero de 2016 prestó sus servicios personales en calidad de trabajador contratista de construcción para Eulises Palacio, quien es subcontratista de la sociedad SM CONSTRUCTORES S.A.S., a su vez contratista del CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA, conformado por las empresas INMATEC Y CIA LTDA y SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A., para la construcción del Macroproyecto San José en el Municipio de Manizales; que el demandante trabajo en la ejecución del contrato 20768-008-2014, el cual tiene como objeto la construcción de 264 apartamentos y las respectivas obras de urbanismo en el Municipio de Manizales; que el salario pactado fue de \$900.000 mensuales, el cual era cancelado por Eulises Palacio, quien además le daba órdenes, así como también, que recibía órdenes del contratista SM CONSTRUCTORES S.A.S., y de ingeniero del CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA; que el 17 de marzo de 2016 la Alcaldía de Manizales suspendió el contrato suscrito con el CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA y, como consecuencia, fue despedido sin que mediare justa causa; que desde la fecha del despido no recibió el pago de los salarios causados desde el 1 al 17 de marzo de 2016; que fue afiliado por un solo día a la seguridad social por SM CONSTRUCTORES S.A.S.; que no recibió la liquidación de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y vacaciones, que la obra continuó durante el año 2016; que en agosto de 2016 envió derecho de petición a la Fiduprevisora S.A. como vocera del patrimonio autónomo P.A. PAVIP, en la que pedía hacer efectivas las pólizas, pero le fue negado; que en el mes de marzo de 2017 fue declarada unilateralmente la terminación del contrato por parte del comité fiduciario en relación con el contrato que venía ejecutando el CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA; que el 15 de mayo de 2017 envió reclamación administrativa a la Empresa de Renovación Urbana de Manizales, pero no fue respondida; y que el 16 de mayo de 2017 envió reclamación a la Fiduciaria la Previsora S.A., sin embargo, no se dio respuesta.

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 07 de julio de 2017 (fl. 111 archivo No 01), ordenando su notificación y traslado a las accionadas.

1.2.1 EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES.: Contestó la demanda el 30 de noviembre de 2017 (Fls. 128 a 132 archivo No 01), oponiéndose a las pretensiones formuladas en tanto que aquella entidad dentro del contrato No 20768-008-2014 sólo ejerció funciones de supervisión, y que la obligada a realizar contrataciones de las obras para la ejecución urbanística era la Fiduprevisora S.A.. Como excepciones de mérito rotuló las de falta de

legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, e inexistencia del contrato de trabajo con la Empresa de Renovación Urbana de Manizales.

1.2.2 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.: Dio respuesta a la demanda el 05 de diciembre de 2017 (Fls. 373 a 389 archivo No 01), oponiéndose a las pretensiones instadas con fundamento en que no existe la solidaridad invocada por el demandante, ya que tal entidad no es beneficiaria de la obra, ya que las mismas hacen parte de un macroproyecto de interés social nacional llamado San José en la ciudad de Manizales; que el patrimonio autónomo no se dedica a las actividades de construcción; que en el fidecomiso no opera la sustitución patronal, ni continuidad de la empresa, ni de los trabajadores, por lo que, la entidad demandada no tiene ningún vínculo jurídico con el demandante. Como excepción previa rotuló la de falta de competencia por no haberse agotado la reclamación administrativa, y como excepciones de fondo esgrimió las de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, enriquecimiento sin justa causa, falta de causa jurídica, buena fe, y la innominada o genérica. Mediante auto del 19 de septiembre de 2021 (Fol. 716 a 718 archivo No 01) fue desvinculada al prosperar la excepción previa de falta de reclamación administrativa.

1.2.3 NACIONAL DE SEGUROS S.A.: En replica a la demanda y el llamamiento en garantía el 27 de agosto de 2018 (Fls. 638 a 643 y 651 a 659 archivo No 01), manifestó frente a las pretensiones de la demanda que no se opone ni se allana en la medida en que el conflicto generado es entre entidades ajenas a la aseguradora, por lo que se atiene a lo probado en el proceso. Propuso como excepciones de fondo las de improcedencia de la acción por carencia de objeto, falta de causa para demandar, inexistencia del derecho, falta de legitimación en la causa por pasiva, hecho exclusivo de un tercero, buena fe, compensación, prescripción, y la innominada o genérica; frente al llamamiento en garantía se opuso aduciendo que no puede responder de eventuales condenas, ya que de conformidad con las disposiciones legales debía el asegurado reportar el siniestro dentro de los tres días a la ocurrencia del mismo, y la entidad aseguradora sólo tuvo conocimiento de lo pretendido con la notificación de la presente demanda. Como excepciones de mérito propuso las de cláusulas que rigen el contrato de seguros, ausencia de cobertura, buena fe, compensación, y prescripción.

1.2.4 EULISES PALACIOS, SM CONSTRUCTORS S.A.S., INMATEC Y CIA LTDA, y SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A.: Contestó el libelo genitor el 03 de diciembre de 2018 (Fls. 681 a 684 archivo No 01), oponiéndose a las pretensiones de la demanda con sustento en que no se demuestran los elementos necesarios y suficientes para declarar la relación laboral, en la medida en que no se encuentra acreditada la prestación personal del servicio, carga probatoria que le corresponde al demandante asumir, pero que no cumple.

Como excepciones de mérito rotuló las de falta de causa para pedir e inexistencia de las obligaciones, ausencia de prueba, y la genérica.

1.3 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 (Fls. 1 a 2 archivo No 06 y audiencia virtual archivo No 07), con la que el cognoscente de instancia declaró la existencia de un contrato de trabajo entre el señor EDWAR PESTAÑA PEREA como trabajador y EULISES PALACIO como empleador, el cual se extendió entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2016, cuando fue terminado en forma unilateral y sin justa causa por parte del empleador, en consecuencia, condenó al demandado EULISES PALACIO a reconocer y pagar \$900.000 por salarios adeudados, \$60.000 por vacaciones, \$150.000 por cesantías, \$1.500 por intereses sobre las cesantías, \$150.000 por prima de servicios, \$1.800.000 por indemnización por despido, los aportes al sistema de seguridad social en pensiones por el tiempo laborado y con un IBC de \$1.800.000, incluyendo los intereses a los que haya lugar; condenó al pago de \$60.000 diarios a partir del 16 de marzo de 2016 y por un término de 24 meses, vencidos los cuales se reconocerán los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera; absolvió a SM CONSTRUCTORES S.A.S., INMATEC Y CIA LTDA, SIG SOUTHWESTERN INTERNATIONAL GROUP S.A. y a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES, de la totalidad de pretensiones, así como también, exoneró de responsabilidad a la llamada en garantía NACIONAL DE SEGUROS S.A.. Finalmente, condenó en costas a Eulises Palacio y en favor del actor.

Para arribar a tal decisiva, y en lo que interesa para los fines del recurso de apelación, empezó por señalar que de conformidad con el artículo 22, 23 y 24 del CST, los elementos para la existencia del contrato de trabajo son: la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la remuneración; asimismo, que toda relación laboral se presume que está regida por un contrato de trabajo, correspondiéndole al empleador desvirtuarla.

Manifestó que la prueba testimonial es coincidente, de la que se puede colegir que fue contratado por el señor Eulises y que el señor Ranulfo o “mambo” era el encargado de Eulises, por lo que, la relación obrero patronal fue con Eulises Palacio. Frente a los extremos temporales, dijo que, a pesar de algunas discrepancias en los testigos al respecto, debe tenerse en cuenta que el testigo Marino manifestó que él empezó desde enero, y el demandante inició un mes y medio después, es decir, coincide con lo planteado en la demanda, con lo cual, se tendrá como fecha inicio de la relación laboral el 16 de marzo de 2016; en relación con la fecha final, los dos testigos coinciden en señalar el mes de marzo de 2016, por lo que, tuvo como extremo final el 15 de marzo de 2016.

En relación con el salario, precisó que existe una diferencia entre lo expresado en el libelo genitor y los testigos, pues mientras en la demanda se relaciona un salario quincenal de \$900.000, los testigos manifiestan que fue de \$1.000.000 quincenal; sin embargo, dijo que debe destacarse el hecho de que el demandante se desempeñaba como oficial, igual que los testigos, razón por la que, debe tenerse en cuenta el salario confesado en la demanda, esto es, el de \$900.000 quincenal. Así las cosas, como en el proceso no hay evidencia del pago por parte del empleador Eulises Palacio, le ordenó reconocer y pagar la suma de \$900.000 por salarios adeudados, \$60.000 por vacaciones, \$150.000 por cesantías, \$1.500 por intereses sobre las cesantías, y \$150.000 por prima de servicios.

Frente a la terminación del contrato, como la decisión de devolverlos a Medellín fue tomada por el empleador ante unos inconvenientes con las personas en Manizales, y sin que obre justificación en ese actuar por parte del empleador, da lugar a configurar el despido sin justa causa, y por ende, condenó al empleador a reconocer y solventar una indemnización por valor de \$1.800.000.

En lo tocante a la indemnización moratoria del artículo 65 del CST, dijo que no evidencia del empleador un actuar que justificara su ausencia de pago, por lo que hay lugar a imponer condena de \$60.000 diarios a partir del 16 de marzo de 2016 y por un término de 24 meses, vencidos los cuales se deberá reconocer los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.

Ahora, determinó que no aparece el reporte de semanas cotizadas al sistema pensional, por lo que profirió condena por los aportes al sistema de seguridad social en pensiones durante el tiempo laborado y con un IBC de \$1.800.000, incluyendo los intereses legales a los que haya lugar.

En cuanto a la solidaridad, consideró que no hay forma de vincular al señor Eulises Palacio con las codemandadas, con lo cual, se rompe la cadena a la que hace referencia la parte actora desde la demanda, cuando menciona que aquel era subcontratista de SM CONSTRUCTORES S.A.S. y esta a su vez subcontratista del CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA, quien era contratista de la Fiduciaria la Previsora S.A., es decir, como no hay forma de relacionar a Eulises Palacio con SM CONSTRUCTORES S.A.S., se hace improcedente aplicar consecuencias jurídicas en contra de las demandadas, además de que los testigos de manera alguna hicieron referencia al proyecto San José, por lo que, no es posible tenerlos como beneficiarios o dueños de la obra, razones suficientes para que no sean objeto de algún tipo de condena. Frente al llamado en garantía, al dispensarse absolución a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES, no le corresponde asumir condena

a la llamada en garantía, y conforme la póliza arrimada, el beneficiario es la Fiduciaria la Previsora S.A, y el patrimonio autónomo P.A. PAVIP, es decir, no se configura las contingencias en beneficio de la llamante en garantía.

1.4 Apelación. La decisión adoptada fue apelada por las siguientes partes procesales:

1.4.1 Demandante. La apoderada judicial del demandante manifestó no estar de acuerdo con la solidaridad, dado que, conforme la historia laboral se puede observar un periodo de cotización por un día con SM CONSTRUCTORES, además, acorde con lo manifestado por el testigo Andrés Cuesta, quien a pesar de la imprecisión hizo referencia a la empresa SM CONSRUCTORES, aunado a que en respuesta a un derecho de petición por parte de la ERUM manifestó que el inició del contrato o ejecución de obras del macroproyecto San José, fue desde 18 de enero de 2016 y la terminación fue el 16 de marzo de 2016, lo que da lugar a dar por acreditado que el señor Eulises Palacio trabajaba con SM CONSTRUCTORES, además de que, ambos testigos manifestaron que hicieron parte del proyecto como lo fue la construcción de vivienda de interés social en el sector la avanzada, contrato suscrito entre la Fiduciaria y el Consorcio Internacional Renovación Urbana; que quedó demostrado la participación de los demandados en dicho contrato; que la forma de terminación del contrato fue por unos disturbios y ese es otro indicio que se trata del mismo proyecto; que quedó acreditado la participación de los trabajadores en el proyecto en el sector la avanzada, es decir, quedó demostrada su relación contractual con el Consorcio Internacional Renovación Urbana; que las constructoras fueron representadas por curador y no puede endilgarse al demandante la demostración de esa relación contractual con el señor Eulises, a pesar de que obran derechos de petición elevados por el demandante donde se logra extraer la relación contractual de las demandadas; en definitiva, pide revocar en forma parcial y declarar que existe prueba de participación del demandante en el proyecto San José, y la respectiva relación contractual entre SM CONSTRUCTORES con el Consorcio Internacional de Renovación Urbana, el señor Eulises Palacio como contratista de SM CONSTRUCTORES y adicionalmente la Empresa de Renovación Urbana de Manizales, es decir, que opera la solidaridad con la acreditación de los requisitos del artículo 34 del CST, el cual puede verificarse con sus objetos contractuales; que la Empresa de Desarrollo Urbano no sólo fue supervisora del proyecto sino también es su dueña en virtud del patrimonio que creó con la Fiduciaria la Previsora como fideicomitente.

1.4.2 Demandado Ulises Palacios. El apoderado judicial del demandado manifestó no estar de acuerdo frente a la existencia de la relación laboral y específicamente respecto de cómo se valoró la prueba para acreditar los extremos temporales, ya que el a quo hizo uso de inferencias lógicas para determinar la fecha de inicio y final de la relación laboral; sin embargo, tales inferencias no son prueba, y recalca que en temas de fechas se debe estar plenamente

acreditadas; que con los testimonios y la demanda hay una disparidad de la fecha inicial de la relación laboral, esto es, en la demanda se dice que es el 15 de febrero, uno de los testigos dice que es el 16 y otros dice que es a mediados, ese “mediados” resulta genérico, puede ser 13 o 18 de ese mes; que con inferencias no se puede tener como cierto lo afirmado en la demanda de que la relación laboral empezó el 15 de febrero de 2016; que no sería por la vía de inferencias determinar de manera contraria a lo que se afirma en la demanda, esto es, tomar otra fecha; que el mismo razonamiento se puede establecer frente a la terminación de la relación laboral, es decir, que las inferencias no son suficientes para tratarse como pruebas; que los testigos son genéricos; que si bien se dice que hubo unos disturbios no puede sostenerse que allí se terminó la relación laboral; que los extremos temporales no están determinados, además de que la carga de la prueba no está en cabeza de los demandados, sino del demandante, quien no satisface el cumplimiento de tal carga probatoria; que el salario resultó de la inferencia, además hizo relación a la confesión de la demandada, desestimando los testimonios que hablan de un millón; que al desestimar los testimonios no pueden tomarse la demanda como confesión, sino que al descartar los testimonios se queda sin prueba el hecho específico del salario, y así debió haberlo considerado el a quo.

1.5 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación fue admitido por ésta corporación el 01 de octubre de 2021 (carp. 02, doc. 02), y mediante auto del 08 de octubre de 2021 (carp. 02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que oportunamente la parte demandante presentó alegatos, ampliando los argumentos referidos a la apelación, en la que aduce que se encuentra acreditada la solidaridad, por lo que, debe proceder la condena en contra de las demandadas, igualmente pide que se reciba el testimonio de Ranulfo Cañizales Mosquera, quien podría aclarar lo referente a la contratación del demandante y los dueños de la obra; por su parte, la llamada en garantía Nacional de Seguros S.A. solicita que se confirme la decisión de instancia en lo referido a la absolución de la llamada en garantía.

2. ANALISIS DE LA SALA

2.1 Apelación sentencia, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de las partes, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problema Jurídico. El tema decidendi en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a dilucidar: **i)** ¿La parte demandante logra demostrar el extremo inicial y final de la relación laboral? **(ii)** ¿La parte demandante logra demostrar el salario devengando durante la relación laboral? Y **(iii)** ¿Las codemandadas deben responder solidariamente de las condenas impuestas a Eulises Palacio?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **CONFIRMATORIO**, con fundamento en que la parte actora logró demostrar los extremos temporales con los testimonios, sin que se requiera que demuestre con exactitud las fechas establecidas en la demanda; frente a la solidaridad, no se cumple con la carga probatoria de la parte demandante, en derredor a demostrar el vínculo jurídico y/o contractual de Eulises Palacio con SM CONSTRUCTORES.

2.4 Contrato de trabajo. Para resolver los problemas jurídicos que concita la atención de la Sala, es preciso señalar que las partes no cuestionan las reflexiones del Juez primigenio en torno de la existencia de la relación laboral con Eulises Palacio. Ello por cuanto a que dichas situaciones quedaron acreditadas con la prueba testimonial recabada de Andrés Felipe Cuesta Moreno y Marino Valencia Sánchez, quienes al unísono dieron cuenta que quien contrató al demandante fue Eulises Moreno.

Ahora, esgrime el apoderado judicial de la parte pasiva, que “no está de acuerdo frente a la existencia de la relación laboral”. Al respecto basta con señalar, que la parte recurrente tiene el deber de sustentar y centrar su actividad argumentativa para destruir los fundamentos en los que el Juez de primera instancia basó las respectivas declaraciones y condenas. No obstante, en el sub-examine la parte pasiva se limitó únicamente a plantear la referida inconformidad sin fundamentación alguna respecto al vínculo laboral, esto es, frente a la existencia de la relación laboral declarada por el A quo, y a este respecto, el máximo órgano de cierre de esta jurisdicción, en sentencia del 10 de agosto de 2010, Radicación 34215, señaló:

*“Al margen de lo anterior, resulta pertinente recordar que la sustentación del recurso de apelación, debe ser una exposición clara y suficiente de las razones jurídicas o fácticas que distancian al impugnante de la resolución judicial, señalando de manera concreta cuáles son los motivos de inconformidad para que esa sentencia sea revocada, aun cuando no implica la utilización de fórmulas sacramentales para su presentación; y por consiguiente, **no es de recibo expresiones vagas o genéricas como que se apela en todo aquello que fue desfavorable, o que se aspira la revocación total de la decisión cuestionada, o que se está inconforme con la totalidad del fallo, para que el Tribunal***

esté obligado a revisar todas las súplicas o en todos sus aspectos la decisión apelada". (Negrilla y Subrayas ex-texto)

Por lo tanto, esta Corporación encuentra limitada su competencia para manifestarse respecto a la "existencia de la relación laboral", esto es, en verificar la declaración de la relación laboral frente a Eulises Palacio, pues la simple afirmación escueta de que "no está de acuerdo con la existencia de la relación laboral", no abre camino para el estudio por vía de apelación de sí el empleador es o no Eulises Palacio, procediéndose en ese orden a estudiar los demás puntos de censura relativos a la relación laboral, como lo es, los hitos de la relación laboral y el salario.

2.5 Extremos temporales y salario. Establecido que el vínculo que unió a las partes se dio mediante una verdadera relación laboral, le compete a la Sala establecer si el a quo se equivocó al fijar los extremos y el salario.

Para resolver sea lo primero señalar que conforme al postulado "onus probandi", "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen" (art.167 C.G.P antes 177 C.P.C), y a su vez, es pertinente reseñar los predicamentos de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, en sentencia del 04 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARA, Radicación No 43377 (SL16110-2015), respecto a la carga de la prueba por activa frente a la necesidad de probar algunos presupuestos de la relación laboral o contrato de trabajo, en cuyo apartado pertinente relieves, que *"además de corresponderle al trabajador la prueba del hecho en que esa presunción se funda, esto es, la actividad o prestación personal del servicio, con lo que se establece que ese trabajo fue dependiente o subordinado, mientras la contraparte no demuestre lo contrario, también al promotor del proceso le atañe acreditar otros supuestos relevantes dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo **el extremo temporal de la relación, el monto del salario**, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización de la terminación del vínculo, entre otros"* (Negrilla y subrayas de la Sala).

Ahora, en lo que respecta propiamente a la censura del recurrente, en relación a que el actor debía de demostrar con exactitud los extremos temporales y que al no hacerlo se debía absolver al demandado, baste con traer a colación el criterio de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral vertido en la sentencia SL905-2013, reiterado en la SL1181-2018 y SL3126-2021, que menciona:

"La jurisprudencia adoctrinada de esa Sala ha fijado el criterio según el cual, en estos casos, en que no se conocen con exactitud los extremos temporales, se podrían dar por

establecidos en forma aproximada, cuando se tenga seguridad sobre la prestación de un servicio en un determinado período, para así poder calcular los derechos laborales o sociales que le correspondan al trabajador demandante”.

Así las cosas, de conformidad con lo consagrado en el artículo 61 del C.P.T y de la S.S. que establece que el juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, habrá de decirse que ningún dislate se aprecia de los discurremientos del a quo al fijar como extremo inicial de la relación laboral el 16 de febrero de 2016 y como hito final el 15 de marzo de 2016.

Lo anterior, si se tiene en cuenta que el testigo Marino Valencia Sánchez, quien fue compañero de trabajo del actor en la misma sección, afirmó que el demandante “entró un mes y medio” después de él, y que el ingresó en enero de 2016, es decir, con el dicho del testigo se puede sostener que el extremo inicial fue el 16 de febrero de 2016, además coincide con el que fuere pedido en la demanda, razón por la cual, se itera, no se estructura el yerro que aduce el apelante, además que la alzada está dirigida a que debía el actor demostrar con exactitud el extremo temporal, lo que resulta equivocado, ya que en estos precisos casos en donde la demostración de la relación laboral se da por cuenta de la prueba testimonial, puede acudirse a “*un término racionalmente aproximado durante el cual el trabajador haya servido*” (Sentencia del 27 de enero de 1954), parámetro que fue el que tomó el cognoscente de instancia en el presente caso, después de que la versión del testigo coincidió con lo pedido en la demanda.

Ahora, frente al extremo final, sirvan las mismas apreciaciones del extremo inicial para confirmar la decisiva en primera instancia, ya que fue el mismo testigo quien afirmó que el actor laboró “hasta marzo de 2016”, es decir, que en línea de principio, según su dicho, y la definición de la RAE (*Preposición que se usa para expresar el término límite en relación con el tiempo, el espacio o la cantidad*)¹, podría sostenerse que laboró hasta el 31 de marzo de 2016; no obstante, como la demanda se planteó como extremo final el 17 de marzo de 2016, y el a quo lo fijó el 15 de marzo de 2016, tampoco se presenta gazapo en la apreciación que al respecto hizo a quo. De igual modo, el hecho de que uno de los testigos (Andrés Felipe Cuesta Moreno) no haya sido claro en derredor a los extremos temporales, ello no significa que el dicho del otro testigo (Marino Valencia Sánchez) pierda eficacia o se tenga que desestimar, pues aquel fue espontáneo en sus manifestaciones en lo relacionado con este ítem.

¹ <https://www.rae.es/dpd/hasta#:~:text=1..hasta%20m%C3%AD%20y%20me%20bes%C3%B3>.

En relación con el salario, además de lo ya decantado, sea oportuno traer a la palestra la sentencia SL3126-2021, en la que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dejó dicho que:

*“Ahora, no puede olvidarse que la jurisprudencia también ha sido enfática en indicar que los jueces **no pueden supeditar su decisión a la demostración estricta de los extremos temporales pretendidos o del salario enunciado en la demanda**, pues si en el plenario hay prueba de un tiempo de servicio inferior o de un salario menor al que se pretendió, tiene el deber de dictar condena minus petita.*

*En esa dirección se ha precisado que en los casos en que se acreditan los extremos temporales -siquiera de forma aproximada, CSJ SL905-2013-, **pero no el salario devengado, es imperativo emitir condena por lo menos con un salario mínimo legal mensual vigente**”.*

Bajo el anterior derrotero, en el sub examine el actor en el libelo genitor manifestó que devengó un salario catorcenal de \$900.000; por su parte, el testigo Andrés Felipe Cuesta Moreno manifestó que el salario devengado era de \$1.000.000 catorcenal, y el testigo Marino Valencia Sánchez, quien dijo que tenían el mismo cargo de oficial, percibían una remuneración de \$2.000.000 mensual o \$1.000.000 quincenal, con lo cual, considera la Sala que la parte actora si logró acreditar la remuneración con la prueba testimonial. Ahora, como quiera que lo demostrado fue un salario de \$2.000.000 mensuales y en la demanda se dijo que devengaba \$900.000 catorcenales, es decir, \$1.800.000 mensuales, resulta acertada la disquisición del a quo en este aspecto, esto es, tomar como confesión lo dicho en la demanda en tanto que al ser un valor menor al demostrado, no se podría tomar como remuneración un salario en mayor valor al pedido en la demanda. Así las cosas, como el ataque del apelante era que debía el actor demostrar con exactitud el salario devengado, debe decirse que no prospera tal censura, pues como se dejó sentado, los testigos son coincidentes en afirmar que fueron contratados para ejercer la misma labor de oficial de construcción devengando un salario de \$2.000.000 mensuales, solo que no se puede tomar ese valor en la medida en que el demandante enfila su pretensión en un salario de \$900.000 catorcenal o \$1.800.000 mensual.

2.6 Solidaridad. Al respecto, considera la Sala importante acudir a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, entre otras, en sentencia SL13686 del 2017, acerca de lo estipulado en el artículo 34 del CST, esto es, la responsabilidad solidaria existente entre el beneficiario de la obra y el contratista independiente. En esa medida, ha señalado la Corte que dicha disposición, tiene como finalidad garantizar y proteger a los trabajadores respecto al reconocimiento y pago de las acreencias laborales a que tienen derecho y que

resultan de la contratación que efectúe el beneficiario del servicio o el dueño de la obra con un contratista independiente a fin de ejecutar o prestar una obra o servicio.

Emerge de lo anterior sin duda que la solidaridad que atribuye el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo al beneficiario del trabajo o dueño de la obra, como fuente de responsabilidad laboral, excluye al contratante cuando las labores del trabajador resultan extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, por manera, que la citada disposición exige para que se reclame la responsabilidad solidaria en favor del trabajador se demuestre lo siguiente:

1. El contrato de obra entre contratante o beneficiario o dueño de la obra y contratista independiente.
2. El contrato de trabajo entre contratista independiente y trabajador.
3. El nexo de causalidad entre los dos contratos.

En otras palabras, se debe acreditar **(i)** la existencia de contrato de naturaleza no laboral entre el contratista y el beneficiario de la obra o prestación del servicio; **(ii)** que la obra y/o el servicio contratado guarden relación con actividades normales de la empresa o negocio del beneficiario de la obra o servicio; es decir, que la labor del contratista no sea extraña y ajena a la ejecutada normalmente por el contratante². **(iii)** Que exista contrato de trabajo entre el contratista y el demandante. **(iv)** Que el contratista o el subcontratista no cancelen las obligaciones de carácter laboral que tiene respecto de sus trabajadores.

Bajo este derrotero, en lo que respecta **al primer presupuesto** no se encuentra acreditado, ya que en efecto de las pruebas obrantes en el plenario no se puede determinar o dar por acreditado la relación contractual del empleador (Eulises Palacio) con SM CONSTRUCTORES SAS, ello por cuanto el testigo Andrés Felipe Cuesta Moreno fue muy ambiguo en este aspecto, primero, porque manifestó que “no tuvo contacto” con Eulises Palacio, segundo, porque a la pregunta de si el señor Eulises trabajaba con otra empresa, respondió que con “ACM CONSTRUCTORES”, y tercero, porque al preguntarle sobre los pagos a seguridad social manifestó que “creo que era con AM CONSTRUCTORES”, es decir, no fue responsivo, claro, y espontáneo, y por ello, de sus dichos no puede desprenderse que entre Eulises Palacio y SM CONSTRUCTORES SAS, haya existido una relación de carácter contractual ni mucho

²CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17-04-2012. Radicación 38255. M.P. Jorge Mario Burgos Ruíz y del 06-03-2013. Radicación 39050. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.

menos dar por demostrado que el aquí demandante haya ejercido su labor en virtud de tal contrato, ya que al preguntarle al testigo sobre el nombre del proyecto dijo que “no me acuerdo muy bien”, es decir, al contrario de lo sostenido por la apoderada judicial de la actora, no puede desprenderse con certeza que el demandante haya desarrollado sus actividades en el contrato o ejecución de obras del macroproyecto San José de la cual SM CONSTRUCTORES SAS era subcontratista, menos que haya existido un vínculo contractual no laboral de Eulises Palacio con esta última sociedad.

En relación con el testigo Marino Valencia Sánchez, al inquirírsele sobre Eulises Palacio, concretamente si sabía dónde trabajaba este o si trabajaba para otra empresa, manifestó que “no recuerdo el nombre de la empresa”, y si bien, dijo que sus labores se desarrollaron en el “barrio la avanzada”, ello no es suficiente para establecer que fue en ejecución de las obras del macroproyecto San José, ya que su manifestación es muy general, y bien puede haberse estado ejecutando otras obras en ese sector o con otros contratistas, por lo que, no se puede asumir o dar por demostrado que el empleador Eulises Palacio era contratista de SM CONSTRUCTORES S.A.S., con la simple manifestación escueta y genérica de que ejecutaron una actividad en un barrio, ya que allí pueden confluir la ejecución de varios proyectos de obra y no necesariamente la obra que ejecutaba SM CONSTRUCTORES S.A.S.

Ahora, aduce la apoderada judicial de la activa que se debe tener en cuenta la planilla de seguridad social visible a folio 81 a 82, la que si bien se encuentra borrosa o mal escaneada, ello no conlleva a que deba revisarse el expediente físico, ya que de tal documento no puede desprenderse la existencia de un vínculo del carácter no laboral entre Eulises Palacio y SM CONSTRUCTORES S.A.S., pues allí sólo da cuenta de una cotización por un día (marzo de 2016) realizada por SM CONSTRUCTORES S.A.S., pero en modo alguno de allí se puede extraer la configuración de alguna relación jurídica o contractual de Eulises Palacio y SM CONSTRUCTORES S.A.S.

Asimismo, hace alusión a que en respuesta a un derecho de petición la ERUM hace referencia a la ejecución del megaproyecto San José y que su ejecución coincide con la prestación del servicio del actor; sin embargo, de la respuesta dada por la ERUM el 11 de abril de 2017 (Fol. 67 y 68 archivo No 01), sólo se desprende que el Consorcio Internacional Renovación Urbana inició el contrato el 18 de enero de 2016 y finalizó el 16 de marzo de 2016, pero de allí nada se dice en relación con Eulises Palacio y su relación con SM CONSTRUCTORES S.A., por lo que, resulta muy forzada la tesis de la actora en que deba tenerse por acreditada la relación de subcontratista de Eulises Palacio con SM CONSTRUCTORA S.A.S.

Del mismo modo, refiere la parte activa que con la documental aportada y con los testimonios se desprenden varios indicios que dan lugar a establecer la relación contractual del empleador con las diferentes demandadas y/o beneficiarias de las obras, para lo cual, debe precisarse que conformidad con el artículo 242 del CGP, los indicios deben apreciarse en conjunto *“teniendo en consideración su gravedad, **concordancia y convergencia, y su relación con las demás pruebas que obren en el proceso**”*, lo que no acontece en el presente asunto, ya que no puede sostenerse y darse por demostrado con la sola relación contractual entre las diferentes demandadas, que el demandante haya sido contratado por Eulises Palacio para la ejecución del megaproyecto San José de la cual las demandadas tengan que llegar a responder solidariamente por las obligaciones insolutas de Eulises Palacio, sin tener certeza ni probatura de la relación jurídica y/o contractual de este último con las codemandadas. Por el contrario, con la prueba documental aportada (Fol. 79 archivo No 01), se desvanece la tesis de la parte actora frente a los indicios a que hace alusión, puesto que incluso los mismos dan cuenta que existen otros consorcios que estaban haciendo obras de construcción de apartamentos en ese mismo sector de la Avanzada en Manizales, tal como fueron el Consorcio la Avanzada y Consorcio Constructora la Avanzada 4 y 5, lo que da lugar a asumir que no puede darse por sentado que al haber desarrollado sus actividades en el sector de la Avanzada en Manizales, como lo dijo uno de los testigos, deba tenerse por acreditado que así aconteció, necesariamente en virtud de la relación como contratista de Ulises Palacio con SM CONSTRUCTORES S.A., y a su vez, esta como integrante del CONSORCIO INTERNACIONAL RENOVACIÓN URBANA, lo que de contera queda sin sostén probatorio la relación contractual de las codemandadas que hace la actora en el hecho dos de la demanda y de la cual predica la solidaridad del artículo 34 del CST.

Igualmente, el hecho de que el demandado haya sido representado en el proceso por curador Ad Litem, ello no releva a la parte demandante de cumplir con los presupuestos del artículo 167 del CGP, vale decir, *“incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”*.

Finalmente, en relación con que debe recibirse el testimonio de Ranulfo Cañizales Mosquera, quien podría aclarar lo referente a la contratación del demandante y los dueños de la obra, acota la Sala que el artículo 60 del CPT y SS, señala que *“El Juez, al proferir su decisión, analizará **todas las pruebas allegadas en tiempo**”*, frente a lo cual, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL13682-2016, ha entendido que *“allegar a tiempo las probanzas, implica que las partes las aporten dentro de las oportunidades legales o etapas procesales correspondientes, esto es, con la demanda inicial, su respuesta, la reforma a la demanda y su contestación, o en el transcurso del proceso cuando no se tengan en su poder, antes de que se profiera la decisión que ponga fin a la*

instancia, siempre y cuando hubieran sido solicitadas como prueba y decretadas como tal”.

Por consiguiente, es inexcusable que la activa habiendo guardado total hermetismo en la oportunidad procesal cuando se decretaron y practicaron las pruebas, ahora pretenda se recepcione un testimonio por el simple hecho de que sus pretensiones en primera instancia no fueron acogidas, vale decir, bien podía en la primera instancia solicitar que el testigo decretado Ranulfo Cañizales Mosquera, se le escuchara en otra oportunidad atendiendo a su situación de salud, pero nada de eso se dijo en la audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2021 (Archivo No 07), en el trámite de la primera instancia, razón por la cual, resulta desde todo punto de vista improcedente su pedimento realizado en los alegatos de conclusión.

Bajo ese horizonte, para la Sala se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia.

3. Costas. Sin costas en esta en instancia, ya que ambas partes fueron recurrentes, sin que haya prosperado la alzada propuesta. Las de primera instancia se confirman.

4. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO.: CONFIRMAR la sentencia materia de apelación, proferida el 29 de septiembre de 2021 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiénose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL 2550 de fecha 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario